

BOLETIN



OFICIAL.

PROVINCIA DE ORENSE.

Se publica los martes, jueves y sábados de cada semana.— Se suscribe en la imprenta de D. Cesáreo Paz y H. á 80 rs. al año para esta Capital, y 96 para fuera franco de porte por trimestres adelantados.

ARTICULO DE OFICIO.

GOBIERNO DE PROVINCIA.

NÚMERO 919.

SECCION POLÍTICA Y ADMINISTRATIVA.

Por circular que se insertó en los Boletines oficiales del 23 y 25 del mes último, se hizo saber á los señores Alcaldes que en el de diciembre inmediato sin falta alguna liquidasen sus respectivas cuentas con el Administrador-depositario de los fondos de la provincia, de los documentos de vigilancia pública que recibieron para esponder en el corriente año. Podrían algunos considerar de poca urgencia este servicio, y en tal concepto demorar su cumplimiento por mas tiempo del que corresponde. Para evitarlo, pues, se les advierte, que en el día 24 del que rige deben hallarse liquidadas definitivamente dichas cuentas. En el 25 pediré relacion de los que resulten omisos, y se les exigirá la mas estrecha responsabilidad sin que excusa alguna pueda ser bastante á eximirles, toda vez que con oportunidad se les avisa. Orense diciembre 2 de 1852.— E. G., Agustin de Torres Valderrama.— Lucas Garcia de Quinones, secretario.

NÚMERO 920.

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernacion del Reino con fecha 26 de noviembre próximo pasado me comunica la Real orden siguiente.

Enterada S. M. la Reina (Q. D. G.) de una consulta dirigida á este Ministerio por el Bibliotecario de la provincial y universitaria de Barcelona, relativa á si los Fiscales de imprenta deberán remitir á la misma todas las obras que se les presenten de conformidad con lo que antes se practicaba en virtud del art. 5.º del Real decreto de 10 de abril de 1844, se ha servido resolver que todas las obras, impresos ó escritos que se entreguen á

los Fiscales por los Editores, se pasen á las Bibliotecas de las Universidades cada semestre formando al efecto un índice á cuyo pie estampará un recibo el Bibliotecario y el cual se dirigirá á este Ministerio por conducto de V. S. Es asimismo su voluntad que en las provincias donde no hay Universidad, se verifique igual entrega y con las mismas formalidades á la Biblioteca del Instituto de la misma. De Real orden lo digo á V. S. para su inteligencia y cumplimiento.

Lo que se inserta en el Boletin oficial para conocimiento del público. Orense 3 de diciembre de 1852.— E. G., Agustin de Torres Valderrama.— Lucas Garcia de Quinones, secretario.

NÚMERO 921.

El Sr. Juez de primera instancia de Carballo con fecha 26 de noviembre último me dice lo siguiente.

Hallándome entendiendo en diferentes causas criminales por hurtos y robos en que aparecen cómplices Maria y Josefa Caamaño, hermanas, asi como otra Maria Caamaño madre de las dos primeras, vecinas de San Payo de Cundins Ayuntamiento de Cabana en este partido judicial de Carballo, cuyas únicas señales constan al márgen; y resultando haberse ausentado las sobredichas tan pronto supieron se las sumariaba, acordé por auto de hoy entre otros particulares recomendar y rogar á V. S. se digne exortar á medio del periódico oficial á todas las autoridades y Guardia civil de la provincia de su mando, encargándoles el descubrimiento, captura y remesa á este Juzgado de las tres sobredichas, y que sean arrestadas y puestas en la cárcel pública para el castigo que merezcan segun los méritos de las respectivas causas; y por de pronto creo merecer de V. S. aviso del recibo del presente.

Señales de las fugadas.

Josefa Caamaño, mayor de 25 años, natural y vecina de San Payo de Cundins Ayuntamiento de Cabana partido judicial de Carballo, hoyosa de vi-

ruelas, corta de talla, buen color, oficio panadera y viste a estilo de labradores.

María Caamaño, hermana y vecina de la antedicha, de edad 50 años, morena y talla completa.

Otra María Caamaño, madre y vecina de las antedichas sus hijas, mayor de 60 años, morena y talla completa.

Lo que se inserta con el objeto de su referencia. Orense 2 de diciembre de 1852. — E. G., Agustín de Torres Valderrama. — Lucas García de Quinones, secretario.

NÚMERO 922.

MINISTERIO DE ESTADO.

Teniendo en consideración las razones que me ha expuesto mi primer Secretario del Despacho de Estado, de acuerdo con el parecer de mi Consejo de Ministros, vengo en decretar lo siguiente:

CAPITULO I.

De los extranjeros y su clasificación en España.

Art. 1.º Son extranjeros:

1.º Todas las personas nacidas de padres extranjeros fuera de los dominios de España.

2.º Los hijos de padre extranjero y madre española nacidos fuera de estos dominios, si no reclaman la nacionalidad de España.

3.º Los que han nacido en territorio español de padres extranjeros ó de padre extranjero y madre española, si no hacen aquella reclamación.

4.º Los que han nacido fuera del territorio de España de padres que han perdido la nacionalidad española.

5.º La mujer española que contrae matrimonio con extranjero.

Como parte de los dominios españoles, se consideran los buques nacionales sin distinción alguna.

Art. 2.º Los extranjeros que hayan obtenido carta de naturaleza, ó ganado vecindad con arreglo á las leyes, son tenidos por españoles.

Art. 3.º Todos los demas que residan en España sin haber adquirido carta de naturaleza, ni ganado vecindad, son extranjeros domiciliados ó transeuntes.

Art. 4.º Se entenderán domiciliados para los efectos legales aquellos que se hallen establecidos con casa abierta, ó residencia fija ó prolongada por tres años, y bienes propios ó industria y modo de vivir conocido en territorio de la Monarquía, con el permiso de la Autoridad superior civil de la provincia.

Art. 5.º Se considerarán transeuntes los extranjeros que no tengan su residencia fija en el reino del modo que expresa el artículo anterior.

CAPITULO II.

De las disposiciones que han de observarse para el ingreso y residencia en España de los extranjeros.

Art. 6.º Para ingresar en territorio español deberá todo extranjero presentar en el primer puerto ó pueblo fronterizo adonde llegue, el pasaporte visado por el agente del Gobierno español á quien corresponda: la Autoridad local refrendará este pasaporte en los términos acostumbrados.

Art. 7.º Ningun extranjero podrá viajar por el reino con pasaporte de la Legación ó Consulado de su nación, sino cuando ingrese en el territorio español, ó cuando salga del mismo.

Art. 8.º El extranjero transeunte que desee domiciliarse, deberá solicitar la correspondiente licencia de la

Autoridad superior civil de la provincia, haciendo constar que reúna las circunstancias prevenidas en el art. 4.º

Art. 9.º En los Gobiernos civiles de todas las provincias se formarán y llevarán matrículas ó registros, en que se asienten los nombres y circunstancias de los extranjeros que residieren ó vinieren á residir en el reino, con separación de las dos clases de transeuntes y domiciliados.

Art. 10. En los Consulados de todas las naciones extranjeras establecidos en España se formarán y llevarán igualmente matrículas ó registros de los súbditos de la nación respectiva.

Estas matrículas han de confrontarse con las de los Gobiernos civiles, pues solo cuando estén conformes con aquellas, y arregladas á las formas prescritas en España, podrán surtir efectos legales en el reino.

Art. 11. Las matrículas de los Gobiernos civiles y las de los Cónsules extranjeros se confrontarán anualmente.

Art. 12. No tendrán derecho á ser considerados como extranjeros en ningun concepto legal, aquellos que no se hallen inscriptos en la clase de transeuntes ó domiciliados en las matrículas de los Gobiernos de las provincias y de los Cónsules respectivos de sus naciones.

Las inscripciones se renovarán en el caso de pasar el extranjero de la clase de transeunte á la de domiciliado.

Art. 13. El extranjero que en contravención á las disposiciones que preceden se introdujese en España sin presentar el pasaporte, podrá ser castigado como desobediente á la Autoridad con la multa de ciento á mil reales, y expulsado ademas del territorio español si el Gobierno asi lo determinase en vista de lo que la Autoridad civil informe por el Ministerio de la Gobernación, y se acuerde en su consecuencia por este mismo y por el Ministerio de Estado.

Art. 14. Cuando algun extranjero llegue á un puerto ó pueblo de la frontera sin el correspondiente pasaporte, será detenido por las Autoridades españolas, que deberán inmediatamente dar cuenta al Gobierno por el Ministerio de la Gobernación, expresando las circunstancias del extranjero, y si es vago, ó si busca auxilio contra los procedimientos de sus Jueces naturales. El Gobierno con este conocimiento, y procediendo siempre definitivamente para estos asuntos de acuerdo los Ministerios de Estado y Gobernación, determinará la espulsion del extranjero, designará el punto de su residencia, ó dispondrá lo que juzgue mas conveniente.

Art. 15. Lo mismo se practicará cuando lleguen á España grupos ó cuerpos de emigrados, hasta que el Gobierno designe el punto de depósito y lo demas que juzgue conveniente, sin perjuicio de que desde luego entreguen las armas los que se hubiesen presentado armados.

Art. 16. El extranjero que desobedezca la orden para su espulsion del reino, quedará sujeto á la pena designada en el art. 285 del Código; considerándose al efecto la desobediencia grave, y como asunto del servicio público, la orden de la espulsion, sin perjuicio de que esta se lleve á efecto despues de ejecutada la pena.

CAPITULO III.

De la condicion civil de los extranjeros domiciliados y transeuntes, sus derechos y obligaciones.

Art. 17. Todos los extranjeros, asi avecinados como transeuntes, tendrán el derecho de entrar y salir libremente de los puertos y poblaciones de España, y de transitar con igual libertad en su territorio, sujetándose á las reglas establecidas por las leyes para los súbditos españoles, asi como á los reglamentos de puertos y policia.

Art. 18. Pueden tambien adquirir y poseer bienes inmuebles, ejercer las industrias, y tomar parte en todas las empresas que no estén reservadas por las leyes y disposiciones vigentes, á los súbditos españoles.

Art. 19. Los extranjeros domiciliados pueden ejercer

el comercio por mayor y por menor, bajo las condiciones que para los españoles establecen las leyes y reglamentos, y tendrán derecho á disfrutar de todos los aprovechamientos comunes del pueblo en donde tengan su domicilio.

Art. 20. Los transeúntes podrán hacer el comercio por mayor con sujeción á las leyes y disposiciones que rigen en el reino.

Art. 21. Asi los domiciliados como los transeúntes, están obligados al pago de los impuestos y contribuciones de todas clases que correspondan á los bienes raíces de su propiedad, y al comercio ó industria que ejercieren, con arreglo á las disposiciones y leyes generales del reino.

Art. 22. Los domiciliados estarán sujetos además al pago de los préstamos, donativos y toda clase de contribución extraordinaria ó personal, de que estarán exceptuados los transeúntes, asi como á los impuestos municipales, vecinales y provinciales.

Art. 23. Unos y otros estarán exentos de las cargas concegiles personales. Pero los domiciliados que tengan casa abierta por sí, estarán sujetos á las cargas de alojamiento y bagajes.

Art. 24. Asi los domiciliados como los transeúntes y sus hijos, cuando no hayan optado por la nacionalidad española, estarán exentos del servicio militar.

Esta exención no alcanza á los nietos cuando sus padres han nacido ya en territorio español, aunque conserven la nacionalidad extranjera.

Art. 25. Ningun extranjero podrá profesar en España otra religion que no sea la Católica Apostólica Romana.

Art. 26. No podrán tampoco participar de los derechos políticos pertenecientes á los españoles, ni obtener beneficios eclesiásticos de ninguna clase, ni pescar en las costas de España, ni hacer con sus buques el comercio de cabotaje.

Art. 27. Tampoco podrán los extranjeros ejercer los derechos municipales en las elecciones para los Ayuntamientos, ni obtener cargos municipales, ni empleo en las diversas carreras del Estado, si no renuncian expresamente por sí y por sus hijos la exención del servicio militar, y á toda protección extraña en lo relativo al servicio de sus cargos.

Para hacer esta renuncia, que se verificará ante la Autoridad superior civil de la provincia, y de la cual se harán las anotaciones correspondientes en las matrículas respectivas, debe hallarse inscripto con antelación en la clase de extranjero domiciliado.

Art. 28. En los abintestatos de los extranjeros domiciliados y transeúntes, la Autoridad local, de acuerdo con el Cónsul de la nación del finado, formará el inventario de los bienes y efectos, y adoptará las disposiciones convenientes para que estén en segura custodia hasta que se presente el heredero legítimo, ó la persona que legalmente le represente.

Asi en este caso, como en los de sucesiones testamentarias, solo conocerán los Tribunales de las reclamaciones que ocurran sobre embargo de bienes de acreedores, y cualquiera otra que tenga por objeto el cumplimiento de las obligaciones ó responsabilidades contraídas en España ó á favor de súbditos españoles.

Art. 29. Los extranjeros domiciliados y transeúntes están sujetos á las leyes de España y á los Tribunales españoles por los delitos que cometan en el territorio español, y para el cumplimiento de las obligaciones que contraigan en España, ó fuera de España, siempre que sean á favor de súbditos españoles.

Art. 30. Mientras que una nueva organización de los Juzgados y Tribunales del reino y de las diversas jurisdicciones no lo impida, conocerán en primera instancia de los pleitos y causas contra los extranjeros domiciliados y transeúntes los Gobernadores de las plazas marítimas y los Ca-

pitanes generales en los demas puntos; y en las segundas y demas instancias sucesivas, el Tribunal Supremo de Guerra y Marina y de extrangeria.

Art. 31. El fuero de extrangeria de que habla el artículo anterior es meramente pasivo, y no gozarán de él los extranjeros domiciliados y transeúntes en los casos siguientes:

1.º En delitos de contrabando.

2.º En los juicios que procedan de operaciones mercantiles.

3.º En los delitos de sedición, y los demas que deben ser juzgados con arreglo á la ley de 17 de abril de 1821.

4.º En los delitos cometidos á bordo y en alta mar, y en los juicios de presas.

5.º En las causas por tráfico de negros.

6.º En los juicios de faltas en que según el Código penal no lo gozan los españoles de ninguna condicion ni estado.

En todos estos casos serán competentes para juzgar á los expresados extranjeros los Tribunales y Jueces establecidos respectivamente por las leyes.

Art. 32. Los extranjeros domiciliados y transeúntes tienen derecho á que por los Tribunales españoles se les administre justicia con arreglo á las leyes en las demandas que entablen para el cumplimiento de las obligaciones contraídas en España, ó que deban cumplirse en España, ó cuando versen sobre bienes sitos en territorio español.

Art. 33. En los negocios entre extranjeros, ó contra extranjeros, aunque no procedan de accion real ni de accion personal, por obligaciones contraídas en España, serán sin embargo competentes los jueces españoles cuando se trate de evitar un fraude, ó adoptar medidas urgentes y provisionales para detener á un deudor que intente ausentarse á fin de eludir el pago, ó para la venta de efectos expuestos á perderse en almacenes, ó para proveer interinamente de guardador á un demente ú otros análogos.

Art. 34. A los exortos de los Jueces extranjeros se dará cumplimiento en todo aquello que puede y debe ejecutarse en el reino; con arreglo á las leyes, cuando vengan por el Ministerio de Estado, con las formalidades y requisitos de costumbre. Por el mismo Ministerio se remitirán los exortos para las Autoridades extranjeras. Estos exortos, cuyo cumplimiento no ha de hacerse por los Cónsules españoles, se dirigirán precisamente á los Tribunales, Jueces y Autoridades extranjeras que deban ejecutar las diligencias que se encarguen.

Art. 35. Son válidos, y causan ante los Tribunales españoles los efectos que procedan en justicia, los contratos y demas actos públicos celebrados fuera del reino, cuando concurren las circunstancias que expresa el Real decreto de 17 de octubre de 1851.

CAPITULO IV:

De los buques extranjeros:

Art. 36. Los buques pertenecientes á cualquiera de las naciones ó Potencias extranjeras podrán acogerse á los puertos españoles.

Cuando lleguen por arribada forzosa, serán auxiliados por las Autoridades españolas sin mas restricciones que las necesarias para evitar el fraude ó contagio.

No se privará á los buques de sus tripulaciones; antes bien serán restituidos á su bordo los desertores cuando fuere posible su aprehension.

Art. 37. Los buques mercantes extranjeros no podrán servir de asilo á los criminales españoles; y cuando se refugiase á bordo, las Autoridades españolas, de acuerdo con el Cónsul respectivo, podrán proceder á la estradiccion.

Art. 38. Respecto del asilo tomado por los criminales españoles en los buques de guerra extranjeros se pro-

cederá á reclamar la estradicion por la via diplomática, con sujecion á las leyes y tratados vigentes.

Art. 39. Cuando á bordo de un buque mercante, anclado en puerto español, ocurra algun exceso que pueda turbar la tranquilidad pública, ó atentar contra la seguridad interior ó exterior del Estado, la Autoridad local competente tendrá derecho á intervenir y conocer para precaver y reprimir aquellos excesos. Si estos atacan esclusivamente la disciplina interior del buque, su Capitan procederá segun estime conveniente, y obtendrá auxilio de las Autoridades españolas, si lo reclama.

Art. 40. En los casos de naufragio de un buque extranjero, las Autoridades de marina, sin que por ninguna otra deba suscitarse competencia, y dar ocasion á entorpecimientos, daños y reclamaciones trascendentales, antes bien recibiendo aquella Autoridad el auxilio de todas las demas, proveerán á todo cuanto fuere necesario para el salvamento de las personas, del buque y de su carga, procediendo en todo de acuerdo con el Capitan del buque y el Cónsul de la nacion respectiva, si en aquel punto lo hubiere.

A falta de Cónsul en el punto del naufragio, podrá el mas inmediato nombrar persona que con poder bastante le represente.

Los extranjeros están esentos, así como los súbditos españoles en la actualidad, de pagar cantidad alguna por razon de costas ó derechos procesales en las actuaciones, expedientes ó procedimientos que se formen con motivo del naufragio y salvamento.

Deberán satisfacer únicamente, como los súbditos españoles, los gastos que se causen por razon del salvamento mismo.

En el caso de que se altere la legislacion y disposiciones vigentes, ni en ningun otro, los extranjeros no tendrán obligación de pagar nunca, por razon de salvamento, derechos mas crecidos que aquellos que paguen los súbditos españoles; pero podrá detenerse la entrega de los efectos salvados hasta que se satisfagan los derechos correspondientes, ó se asegure el reintegro por medio de fianza bastante.

CAPITULO V.

Disposiciones generales.

Art. 41. Todas las disposiciones del presente decreto son únicamente aplicables á la Península é Islas adyacentes, subsistiendo en su fuerza y vigor en las provincias de Ultramar las disposiciones que allí rigen sobre extranjeros.

Art. 42. No alteran tampoco las leyes respecto de los Embajadores, Ministros plenipotenciarios y demas individuos dependientes de las Legaciones extranjeras.

Art. 43. Los súbditos de la Sublime Puerta, los moros de Marruecos y los de las Regencias berberiscas serán juzgados por los respectivos Cónsules en los negocios que entre ellos ocurran, con arreglo á los tratados y disposiciones vigentes.

Art. 44. Los derechos de los extranjeros que adquieren nacionalidad española por obtener carta de naturaleza, ó ganar vecindad con arreglo á la Constitucion, así como las formalidades y condiciones para obtenerla, se fijarán en una disposicion especial.

Art. 45. El extranjero que obtuviere naturalizacion en España, así como el español que la obtuviere en el territorio de otra Potencia sin el conocimiento y autorizacion de su Gobierno respectivo, no se libertará de las obligaciones que eran consiguientes á su nacionalidad primitiva, aunque el súbdito de España pierda en otro concepto la calidad de español, con arreglo á lo dispuesto en el párrafo quinto, artículo 1.º de la Constitucion de la Monarquia.

En consecuencia de esta declaracion, cuando un extranjero se haya naturalizado en España sin autorizacion

de su Gobierno, y pretenda por este medio eximirse de las obligaciones del servicio militar, ú otras que le correspondieran en su patria primitiva, el Gobierno español no sostendrá la esencion, así como no la reconocerá en un español que alegase cambio de su nacionalidad sin haber obtenido la autorizacion espresada.

Dado en Palacio á 17 de noviembre de 1852.—Está rubricado de la Real mano.—El Ministro de Estado, Manuel Bertran de Lis.

(Gaceta de Madrid del jueves 25 de noviembre n.º 6730.)

NÚMERO 923.

ADMINISTRACION DE CONTRIBUCIONES INDIRECTAS

DE LA PROVINCIA DE ORENSE.

Contribucion de Consumos.

Resuelto por la Direccion general de Aduanas, Derechos de Puertas y Consumos, en orden fecha 16 de noviembre último se lleve á cabo la rectificacion de los cupos de encabezamientos de consumos con arreglo al Real decreto de 31 de diciembre del año pasado de 1851 y circulares de la extinguida Direccion general de Contribuciones Indirectas fechas 16 de enero y 21 de agosto del corriente año, que tratan acerca del modo de adeudar las carnes de todas clases por libras en vez de cabezas, en especialidad las de cerdo, cuya facultad concedia el art. 45 de la instruccion de 25 de mayo de 1845; la Administracion se ha ocupado con el mayor detenimiento en la clasificacion de las carnes que se consignan en los encabezamientos de los respectivos Ayuntamientos de esta provincia, sujetando las que antes figuraban por unidades á la liquidacion por libras y al respecto del derecho que se comprende en la tarifa vigente. Y como dicha rectificacion debiese haber tenido efecto desde 1.º de octubre último segun la espresada circular de 21 de agosto, y no se haya llevado á efecto hasta el presente por haber elevado una consulta sobre este punto á la Direccion general del ramo, resulta ésta en el sentido afirmativo de la rectificacion, con encargo espreso de hacer efectivo en las areas del Tesoro el importe del trimestre que corresponda por el aumento en el modo de adeudar las carnes en lo que resta del presente año. En su consecuencia, á fin de que tenga el mas exacto cumplimiento por los Ayuntamientos de esta provincia, se publica á continuacion el estado de la rectificacion donde figura el aumento parcial que corresponde á cada uno, el cual deberán apresurarse á ingresar en Tesorería sin dar lugar á solicitar del Sr. Gobernador la via ejecutiva para que lo efectúen. Con este motivo se hace presente á los Ayuntamientos que la totalidad que figura en el presente estado, es la que debe regir para el próximo año de 1853, á cuyo tipo deben ceñirse para hacerlo efectivo por los medios que determina la instruccion de 25 de mayo de 1845.

Orense 3 de diciembre de 1852.—Joaquin Maria Espina.

Estado demostrativo de la rectificación de los cupos de encabezamientos de consumos de la provincia, con arreglo á lo prevenido por la Dirección general de Aduanas, Derechos de puertos y Consumos, en orden fecha 16 de noviembre último y en conformidad á lo dispuesto en la instrucción circularada por la distinguida Dirección general de Contribuciones Indirectas con fecha 17 de enero del corriente año, para llevar á cabo las reformas contenidas en el Real decreto de 31 de diciembre del año pasado de 1851, y circular de 21 de agosto del corriente año, comprensivas al modo de adeudar las carnes de vaca, buey y en especialidad de cerdo, por libras en vez de cabezas, segun determinaba la instrucción de 23 de mayo de 1845.

Table with columns: AYUNTAMIENTOS, Número de vecinos, VINO, Vinagre, Aguardiente, AGENITE, Jabón, CARNES MUERTAS, Productos que arrojan los cerdos en vivo liquidados por libras, TOTAL, Idem del que se abisieron hasta el 1.º de octubre de este año, De mas, IMPORTE del trimestre que corresponde satisfacer á los pueblos por el aumento obtenido en la rectificación.

BAUTISMOS.

RESUMEN numérico de los celebrados en esta provincia en el citado trimestre.

PARTIDOS.	HIJOS.						TOTAL de ambas clases.
	De legítimo matrimonio.			Fuera de matrimonio.			
	Varones.	Hembras.	TOTAL.	Varones.	Hembras.	TOTAL.	
Allaríz.	107	114	221	5	6	11	232
Bande.	63	36	139	6	6	12	151
Carballino.	138	116	254	10	7	17	271
Celanova.	135	125	260	13	9	22	282
Ginzo.	103	92	195	11	11	22	217
Orense.	218	194	412	12	13	25	437
Ribadavia.	96	82	178	4	7	11	189
Trives.	113	103	216	13	14	27	243
Valdeorras.	69	80	149	4	8	12	161
Verin.	100	109	209	17	6	23	232
Viana.	71	63	134	13	7	20	154
TOTAL.	1213	1154	2367	108	88	202	2569

MATRIMONIOS.

RESUMEN numérico de los celebrados en esta provincia en el primer trimestre de 1852.

PARTIDOS.	MATRIMONIOS DE				TOTAL.
	Soltero con		Viudo con		
	Soltera.	Viuda.	Soltera.	Viuda.	
Allaríz.	56	3	5	1	65
Bande.	27	3	6	1	37
Carballino.	87	1	11	6	105
Celanova.	72	4	16	1	93
Ginzo.	60	2	4	»	66
Orense.	123	15	14	1	153
Ribadavia.	60	1	5	1	67
Trives.	40	5	7	9	61
Valdeorras.	56	4	7	»	67
Verin.	58	»	5	4	67
Viana.	17	1	5	»	23
TOTAL.	656	39	85	24	804

BAUTISMOS.

RESUMEN numérico de los celebrados en esta provincia en el citado trimestre.

PARTIDOS.	HIJOS.						TOTAL de ambas clases.
	De legítimo matrimonio.			Fuera de matrimonio.			
	Varones.	Hembras.	TOTAL.	Varones.	Hembras.	TOTAL.	
Allaríz.	127	114	241	12	8	20	261
Bande.	58	63	121	4	4	8	129
Carballino.	111	113	224	8	9	17	241
Celanova.	116	145	261	11	10	21	282
Ginzo.	76	102	178	9	5	14	192
Orense.	174	173	347	13	10	23	370
Ribadavia.	36	93	189	10	8	18	207
Trives.	65	91	156	8	19	27	183
Valdeorras.	70	61	131	3	10	13	144
Verin.	117	103	220	12	10	22	242
Viana.	65	31	96	15	19	34	130
TOTAL.	1075	1089	2164	105	112	217	2381

MATRIMONIOS.

RESUMEN numérico de los celebrados en esta provincia en el segundo trimestre de 1852.

PARTIDOS.	MATRIMONIOS DE				TOTAL.
	Soltero con		Viudo con		
	Soltera.	Viuda.	Soltera.	Viuda.	
Allaríz.	56	1	7	2	66
Bande.	41	2	8	2	53
Carballino.	61	1	8	1	71
Celanova.	57	3	9	1	70
Ginzo.	43	1	13	»	57
Orense.	71	9	19	2	101
Ribadavia.	44	7	12	3	66
Trives.	37	1	7	»	45
Valdeorras.	31	»	1	»	32
Verin.	68	1	7	3	79
Viana.	24	2	1	»	27
TOTAL.	533	28	92	14	667

